

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA



Resolución

Por la cual se decreta caducidad de una actuación administrativa y se dictan otras disposiciones

La Directora General de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA", en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo N° 100-02-02-01-016 del 29 de octubre de 2019, en concordancia con el Decreto 1076 de 2015, y,

CONSIDERANDO.

Que en los archivos de la Corporación se encuentra radicado el expediente 160903-332/08 donde obra el informe técnico N° 430-08-18-03-0386 del 23 de julio del año 2008, la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental indico:

Conclusiones:

- *Al momento de la visita se observan obras de ampliación y adecuación en el canal de Nueva Colonia, en predios de la finca Santa María de propiedad del señor Edgar Silva, para construir un nuevo embarcadero.*
- *Esta obra carece de los permisos de ocupación de cauce por parte de la Corporación.*

Que a través del Auto N° 210-03-50-0403 del 23 de julio del año 2008, la Corporación declara iniciada la investigación prevista en el artículo 202 del Decreto 1594 de 1984, en orden a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos u omisiones e identificar a los presuntos infractores, decreta las siguiente medidas preventivas:

- Suspender la construcción de obras en el canal de Nueva Colonia, jurisdicción del Municipio de Turbo, en predio de la finca Santa María.
- Requerir al señor EDGAR ALFONSO SILVA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.324.075, para que recupere el terreno intervenido devolviéndolo a las condiciones iniciales del canal Nueva Colonia.
- Allegar los diseños, memorias técnicas, presupuesto de las actividades y las medidas de manejo ambiental de la obra en la construcción en la finca Santa María
- Amonestar de manera escrita al señor EDGAR ALFONSO SILVA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.324.075, para que se abstenga de construir todo tipo de obra hidráulica sin el respectivo permiso de CORPOURABA.

Así mismo formuló pliego de cargos en contra del señor EDGAR ALFONSO SILVA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.324.075, por presuntamente infringir los artículos 132 del Decreto Ley 2811 de 1974; 188 y 192 del Decreto 1541 de 1978.

Mediante Auto N° 210-03-50-01-0606 del 30 de octubre del año 2008, se vinculó a la actuación administrativa aperturada a través del Auto N° 210-03-50-0403 del 23 de julio del año 2008, al señor JOSE DIONICIO LUGO MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.586.659, en calidad de propietario de la finca Santa María y se le formulo pliego de cargos por presuntamente infringir los artículos 132 del Decreto Ley 2811 de 1974; 188 y 192 del Decreto 1541 de 1978. No se evidencia en el expediente que se haya surtido la notificación al señor JOSE DIONICIO LUGO MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.586.659,

ANALISIS JURIDICO.

Que, en los procesos sancionatorios de carácter ambiental, la Autoridad Ambiental se encuentra en la obligación de verificar la ocurrencia de los hechos que dieron inicio al proceso sancionatorio ambiental.

Que el presente proceso se inició en el año 2009, encontrándose vigente el Decreto 1594 de 1984, el cual en los artículos 197 a 254 regulaba el proceso administrativo sancionatorio ambiental; no obstante, dicho régimen no contenía la figura de la caducidad administrativa, razón por la cual y frente al vacío de la norma, lo procedente era la remisión a lo previsto por las disposiciones del entonces Código Contencioso Administrativo.

Que teniendo en cuenta que, respecto de la caducidad tanto en lo legal como en lo jurisprudencial; salvo la norma especial aplicable, la figura sigue conservando su esencia y el término para su aplicación, y atendiendo a que la presunta conducta conocida por esta Autoridad Ambiental tuvo lugar estando vigentes las normas antes mencionadas, cabe para este caso la aplicación de la caducidad de la facultad sancionatoria prevista por el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, el cual a su tenor literal prevé:

Artículo 38. Caducidad respecto de las sanciones. *Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (03) años de producido el acto que pueda ocasionarlas."*

Que es pertinente traer a colación el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, cuando establece:

Artículo 308 Régimen de transición y vigencia: *El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.*

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

Que teniendo en cuenta que la figura de la Caducidad de la facultad sancionatoria, está establecida por la Ley y ha sido de aplicación en el Derecho Colombiano siendo su antecedente más inmediato el artículo 38 del Decreto 01 de 1984 (antiguo Código Contencioso Administrativo), ampliamente estudiada y analizada a través de diferentes manifestaciones jurisprudenciales, entre las cuales se evidencia lo manifestado por el H. Consejo de Estado, quien en reiteración a su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, precisó: "(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor (...)"

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio", y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que adicionalmente, dentro de las garantías constitucionales del debido proceso sancionador, cobran especial importancia los principios de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, que imponen a la administración, el deber de actuar diligentemente y preservar las garantías de quienes resultan investigados; es así como, la caducidad tiene por objeto, fijar un límite en el tiempo para el ejercicio de ciertas acciones, en protección de la seguridad jurídica y el interés general.

Que en la sentencia CI/ 401 – 10 al respecto de la acción sancionatoria la Corte se refirió en los siguientes términos: *" en materia ambiental, antes de la entrada en vigencia de la ley 1333 de 2009, el régimen sancionatorio estaba previsto, fundamentalmente, en la ley 99 de 1993, que remitía al procedimiento contemplado en los decretos 1594 de 1984 y 948 de 1995, reglamentario de la legislación ambiental en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. En la medida en que dichas disposiciones no contemplaba un término de caducidad especial en materia ambiental, era preciso remitirse a la caducidad general establecida en el Código Contencioso Administrativo para la facultad sancionatoria de las Autoridades, que como se ha visto, se fija en tres años a partir del momento en el que se produce la infracción. (...)"*

La facultad sancionatoria del Estado responde en materia ambiental a la necesidad de prevenir, corregir y controlar todas aquellas conductas que ponen en riesgo o lesionan los bienes jurídicos cuya protección está reservada a las autoridades ambientales, en el marco de la prevalencia del interés general sobre el particular, así las cosas, la caducidad es una garantía constitucional para el presunto infractor ambiental, y la ampliación del término de la misma en el curso de un proceso generaría la vulneración de los principios fundamentales constitucionales al adelantar los procedimientos que lleven a una sanción en un término establecido previa y legalmente.

Que la jurisprudencia constitucional se desprende, entonces, el criterio conforme al cual la facultad sancionatoria del Estado es limitada en el tiempo y que el señalamiento de un plazo de caducidad para la misma, constituye una garantía para la efectividad de los principios constitucionales de seguridad jurídica y prevalencia del interés general. Dicho plazo, además, cumple con el cometido de evitar la paralización del proceso administrativo y, por ende, garantizar la eficiencia de la administración.

Que, siendo la caducidad, una institución de orden público, a través de la cual el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda, que su declaración proceda de oficio, por cuanto, al continuar el proceso, este culminaría con un acto viciado de nulidad, por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite

Que, en virtud de lo anterior, CORPOURABA tenía hasta el año 2011 para decidir el proceso sancionatorio ambiental toda vez que a partir de dicha fecha operaba el fenómeno de la facultad sancionatoria previsto en el artículo 38 del Decreto 01 de 1984.

Que han transcurrido más de tres (03) años hasta hoy , desde que se inició mediante el Auto N° 210-03-50-0403 del 23 de julio del año 2008, la investigación prevista en el artículo 202 del Decreto 1594 de 1984, decretaran y formularan pliego de cargos al señor EDGAR ALFONSO SILVA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.324.075, adicionalmente a través de Auto N°210-03-50-01-0606 del 30 de octubre del

RS

año 2008, se vinculó a la actuación administrativa aperturada a través del Auto N° 210-03-50-0403 del 23 de julio del año 2008, al señor JOSE DIONICIO LUGO MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.586.659, en calidad de propietario de la finca Santa María y se le formuló pliego de cargos, esto es, desde la ocurrencia de los hechos materia del proceso de investigación sin que se hubiera adoptado una decisión de fondo, por lo tanto ha de declararse la caducidad de la facultad sancionatoria para imponer la sanción.

Como consecuencia, se procederá a declarar la caducidad del proceso sancionatorio ambiental iniciado mediante Auto N°210-03-50-01-0606 del 30 de octubre del año 2008 y el archivo del expediente 160903-332/2008, conforme con el fundamento legal y jurisprudencial descrito en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, la Dirección General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la investigación administrativa ambiental, iniciada por esta Corporación mediante Auto N° 210-03-50-01-0606 del 30 de octubre del año 2008, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo a los señores EDGAR ALFONSO SILVA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.324.075, JOSE DIONICIO LUGO MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.586.659, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 491-2020.

ARTÍCULO TERCERO. PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOURABA, a través de la página Web www.corpouraba.gov.co, conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO. Una vez ejecutoriada la presente resolución, se ordena el **ARCHIVO DEFINITIVO** del Expediente Rdo. 160903-332/2008 que contiene las actuaciones administrativas adelantadas por CORPOURABA, conforme a lo establecido en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente providencia no procede recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE


VANESSA PAREDES ZUNIGA
Directora General

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Anderson Piedrahita		30-11-2020
Revisó:	Manuel Ignacio Arango		07-12-2020

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
Exp. 160903-332/2008